Breve Historia del problema de la Cooperativa, narrada por el Consejo de Administración presidido por Ofilia Garza Salinas, y debidamente documentada para conocimiento de la ciudadanía.

Los problemas empezaron cuando siendo Presidente del Consejo de Administración el Sr. Juan Onofre, se nos empezó a impedir la entrada a las Asambleas a algunos socios, por el único motivo de que no estábamos de acuerdo en ciertos manejos y lo externamos. Tuvimos muchos problemas para poder entrar a las asambleas hasta que se nombro Presidente al Sr. Casimiro Seguy Aguirre y siendo él Presidente, se convocó a una Asamblea extramuros únicamente a socios fundadores, en la cual se nombró un nuevo Consejo de Administración con el fin de empezar a hacer valer los Estatutos de la Cooperativa, mismos que nunca se habían ni se han respetado.

Al enterarse el Sr. Casimiro Seguy de esto, interpone una demanda en contra de los miembros de este Consejo recién formado ante un juzgado civil en Piedras Negras, Coah., mismo que les damos a conocer para que conste que el Juez segundo de Primera Instancia en Materia Civil, Lic. Ignacio Martiniano Martínez Ortiz, resolvió a nuestro favor diciendo que el Sr. Casimiro Seguy Aguirre y otros demandantes carecen de legitimación para comparecer. **(Anexo No. 1).**

El Sr. Casimiro Seguy, al no haber ganado el juicio anterior, apela a los tribunales de Saltillo.

Mientras el juicio se esta llevando a cabo en Saltillo, se termina la gestión del Sr. Casimiro Seguy y convoca a Asamblea para cambio de administración, **(Anexo no. 2). (Habiéndole dicho el Juzgado que no tenía personalidad jurídica, no tenía poder de convocatoria).**

De esa Asamblea **ilegal**, emana el nuevo "Consejo de Administración presidido por el Sr. Ramón de León", al cual se le dijo cuando fue a casa del Sr. Juan Miguel Moreno acompañado del Sr. Conrado Piña a pedir su apoyo para su

campana, que no los podía apoyar porque nos encontrábamos en medio de un juicio que ya se había ganado en primera instancia, a lo que el Sr. Ramón de León contestó que estaba enterado y que en el momento en que terminara el juicio en Saltillo, si nos favorecía, entregarían de inmediato, diciendo el Sr. Conrado Piña que lo único que querían era su apoyo para quitar de ahí por lo pronto al Sr. Casimiro Seguy. (Promesas que se les olvidaron muy pronto).

El juicio en segunda instancia también nos favoreció. El Sr. Casimiro tenía posibilidad de recurrir a una tercera instancia, pero desconocemos el motivo por el que no apeló, quedando la segunda instancia como definitiva.

El día 19 de diciembre del 2001, nos presentamos en las instalaciones de la Cooperativa, mostrando el juicio que nos acreditaba como nuevo Consejo de Administración. El Sr. Ramón de León y su "Consejo", no lo aceptaron, diciendo que lo aceptarían en el momento en que la Autoridad competente viniera a hacernos entrega legal. (Otra promesa olvidada). Con esa fecha pusimos una demanda contra ellos ante el Ministerio Público por despojo y ellos a su vez pusieron una demanda contra nosotros por "Uso Arbitrario del **Propio Derecho**".

Por alguna razón que desconocemos la demanda de nosotros no prosperó, o se traspapeló o algo pasó, pero la de ellos si prosperó y aún existiendo un amparo que nadie respetó, tuvimos que abandonar las instalaciones el día 26 de enero del 2002.

El día 20 de febrero del 2003, se nos concede un amparo en Revisión Penal (**Anexo No. 3**), mismo que damos a conocer para que conste, en el que claramente dice el Juez: "la referida conducta no resulta reprochable penalmente, pues de conformidad con el art. 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, es tarea de los directivos de una sociedad mercantil encargarse de su administración y, para ello es necesario que ocupen las instalaciones de la empresa, lo cual hicieron al amparo del cargo que se les confirió en asamblea, según quedó revelado, de ahí entonces, que actuaron en

ejercicio de un derecho y no se advierte que lo hubieran hecho con el indebido propósito de causar un daño, si bien es cierto que los ahora recurrentes (*nosotros*) llegaron a dichas instalaciones sin contar con nada más, como sería una determinación expedida por una autoridad que avalara su actuación, también lo es que **con dicha acta de asamblea era suficiente para poder tener posesión de las instalaciones, sin necesidad de otro requisito, dado que de ésta se desprende el carácter de directivos y ello los legitima para actuar como lo hicieron...**"

El día 10 de marzo del 2003, se le notifica al "Consejo" presidido por el Sr. Ramón de León, Por parte de la Juez Primero Local Letrado en Materia Penal, Lic. Rosa Patricia Sena Vargas, que tiene 24 horas para desalojar las instalaciones de la Cooperativa, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así se procedería a usar la fuerza pública en caso de ser necesario. **(Anexo No. 4).**

Se le olvidó una vez más al Sr. Ramón de León su promesa de entregar cuando viniera una autoridad competente y se negaron a entregar, interponiendo una queja ante el juzgado, argumentando que se había excedido en el castigo, a lo que el Juez Federal contestó que no era así, que no había exceso, y ordenando a la Juez Primero Local Letrado, se llevara a cabo la Diligencia de Restitución el día 14 de julio del 2003.

La Lic. Patricia Sena Vargas, Juez Primero Local Letrado en Materia Penal, pide auxilio al C. Director de Policía y Tránsito de Allende, el día 11 de julio para que el día 14 del mismo, a las 11 hors. Designe elementos de la corporación a su cargo para que auxilién el desarrollo de la diligencia de **Restitución de Inmueble**, y hasta que esa autoridad indique la conclusión de la diligencia. **(Anexo No. 5).**

El día 14 de julio la Juez Primero Letrado, personalmente, y en presencia de ambos Consejos de Administración, procede "**a dar cumplimiento lisa y llanamente a la ejecutoria de amparo del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito**

Y concretamente haciendo entrega de las instalaciones de la empresa. (Anexo No. 6).

En este anexo se pueden ver las firmas del Sr. De León y sus "compañeros".

Pero el día 17 de julio, a la sombra de la noche y escudados en el anonimato de la multitud a la que incitaron, se les "olvidó" una vez más que las autoridades habían hecho entrega y se presentaron en la cooperativa. Rompieron los candados y armados con tubos y demás, rompieron puertas, ventanas, vidrios, etc., todo lo que se vio en el video que tan celosamente esconde la televisora local (canal 9) a la que se le encontró que les estaban pagando una iguala mensual de \$ 4,200.00, cantidad que le pagan por algún motivo desconocido ya que la cooperativa no tiene publicidad.

Tenemos varias preguntas:

Cómo es posible que a pesar de todo esto, el "Consejo" de Ramón de León esté sentado ahí impunemente sin que haya una autoridad que haga valer nuestro derecho????

Se le olvidó a Ramón de León que dijo que al venir la autoridad competente nos entregaría sin problema???

Será contagiosa su amnesia y se la contagió al Director de Policía y Tránsito Municipal?? Porque se llamó a la policía muchas veces cuando estaban "asaltando" (por primera vez) la cooperativa y nunca acudió ni una patrulla, pero en cuanto nos sacaron a nosotros, llegó de inmediato la fuerza pública municipal para impedir que tratáramos de volver a entrar, que no se supone que la policía está para evitar la violencia????

Dicen Ramón y sus compañeros que nos expulsaron por dañar a la cooperativa... Por favor!!! Que les dice el video que todos vieron??, quién dañó puertas, ventanas y vidrios??, y eso es en las instalaciones, pero porqué no hay

dinero en bancos si cuando nosotros entramos no había nada de gas pero si había una deuda de millón y medio de pesos??

En dónde está el dinero de la venta de ese gas que se debe a PEMEX???

Ya les habrán platicado a sus fieles seguidores lo que han hecho con el dinero que falta????

Han enseñado algún papel que convenza a la gente de que tienen razón, o sólo han hablado sin demostrar nada???

Podría alguno de ustedes hacernos el favor de contestarnos??

Una vez más muchas gracias.

Consejo de Administración de la Cooperativa de Gas Butano de Allende, S. C. L., legalmente constituido y aceptado por las autoridades competentes.